



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
Rama Judicial del Poder Público



## SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

### SENTENCIA

**Proceso** : Ordinario de Segunda Instancia  
**Demandante** : **JORGE GREGORIO LARA QUINTERO**  
**Demandados** : **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. -INDEGA S.A.-**  
**Radicado** : **050013105 019 2014 01009 02**  
**Providencia** : Sentencia  
**Temas y Subtemas** : Laboral individual – contrato de concesión, contrato realidad, Subordinación -  
**Decisión** : Confirma Sentencia absolutoria  
**Sentencia N°** : 245

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

## ANTECEDENTES

### Pretensiones:

Se declare la existencia de un **contrato de trabajo** desde el **1º de mayo de 1987 hasta el 30 de octubre de 2010**; se ordene el **reintegro** al cargo denominado Primer Vendedor o a otro igual o superior, con el pago de salarios, prestaciones legales y extra legales, aportes y reajustes al Sistema de Seguridad Social, nivelación salarial, reembolso de valores retenidos hasta donde se puedan demostrar incluyendo el de una supuesta venta de camión, reembolso de las cotizaciones a salud y pensiones pagadas por el demandante como independiente, cesantías e intereses a las cesantías, indemnizaciones por no consignación de cesantías y por mora en el pago de prestaciones sociales, costas procesales. En **subsidio**, se ordene el **pago de indemnización por despido sin justa causa conforme al Pacto Colectivo, pensión sanción** desde el 2 de noviembre de 2011 cuando cumplió 55 años de edad.

### Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que el señor Jorge Gregorio Lara Quintero prestó servicios a favor de INDEGA S.A. Sucursal Medellín, bajo continuada subordinación y dependencia, sin interrupción, desde el día 23 de mayo de 1987 hasta el 30 de octubre de 2010, cuando fue despedido sin justa causa; sus funciones siempre estuvieron adscritas al Departamento de Ventas, en el transporte y distribución de productos de Coca Cola, nominado como Primer Vendedor, en diferentes rutas locales o

también llamadas ruta sede; debía firmar recurrentes contratos de naturaleza comercial o en ocasiones contratos de trabajo, con compañeros que desempeñaban la misma función y bajo la modalidad de contrato mercantil. El sistema de remuneración consistía en que, por cada caja de productos transportado y distribuido, según planilla entregada por la empresa, se le reconocía un valor fijo multiplicado por el volumen de cajas repartidas cada día.

Expone que INDEGA S.A. le cargaba los gastos por alquiler del camión propiedad de la demandada, con los colores distintivos y logos de Coca Cola, combustible del camión, salarios, prestaciones sociales y seguridad social de dos ayudantes del demandante seleccionados por Coca Cola, trasladándole todos los gastos operacionales de la distribución de productos; **en el último año las comisiones no pasaban de \$1.000.000 en promedio**, alcanzado por jornadas de trabajo que superaban las doce horas diarias. Aduce que los señores Fernando Sánchez, Jhon Jairo Montoya, Alberto Álvarez y Jhon Jairo Tamayo, trabajaban para la demandada mediante contrato a término indefinido, ejecutando las mismas funciones, sin incurrir en gastos por la operación, con ingresos superiores en promedio de \$5.000.000, más prestaciones sociales y beneficios convencionales, con jornadas de trabajo inferiores.

Sostiene que, a finales de la década de los años 90, la empresa le impuso la celebración de compraventa por *uno de sus viejos camiones*, exigiéndole cuota inicial de \$3.600.000, con deducción durante todo el tiempo de una cuota para abono a la deuda, sin que tuviera la propiedad sobre el vehículo con placas LEG-464. Concluye que siempre estuvo excluido de los beneficios

del Pacto y de la Convención Colectiva. Cumplió 55 años de edad el día 2 de noviembre de 2011.

### **Respuesta de la parte demandada:**

**INDEGA S.A.** a través de apoderado judicial, expuso que los hechos de la demanda no son ciertos o no le constan. Sostiene que en el lapso afirmado, según la historia laboral, el señor Jorge Gregorio laboró para diferentes sociedades y personas naturales y también aparecen múltiples cotizaciones al Sistema por el mismo demandante, lo que excluye subordinación frente a Indega S.A.; admite pero no en el espacio temporal que se cita, que **el actor celebró un contrato comercial consistente en la "concesión de productos para la reventa"**, mediante los cuales, con total autonomía técnica, económica y administrativa adquiría productos para revenderlos, asumiendo los gastos y costos que la actividad mercantil implicaba, como el pago de sus empleados, arriendo de vehículos, pago de la seguridad social; costeara el transporte de las mercaderías, se encontraba inscrito como comerciante, tributaba ante la DIAN, celebraba contratos con sociedades asesoras para el manejo de su ejercicio mercantil; obtenía unas utilidades de la diferencia de precios entre la compra y venta; en caso que el valor de los productos no le fueran competitivos podía adquirirlos o no; en su calidad de concesionario adquirió un vehículo para desarrollar su actividad mercantil, como un acto propio del contrato comercial; pone de presente que las partes celebraron una **transacción** respecto del contrato de concesión. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas y formuló como excepciones las

denominadas prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación, transacción - cosa juzgada.

### **Sentencia de Primera Instancia:**

**El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, declaró probada la excepción denominada inexistencia de la obligación y absolvió a INDEGA S.A.** de las pretensiones formuladas en su contra por el señor **JORGE GREGORIO LARA QUINTERO**, a quien impuso condena en Costas con agencias en derecho en la suma de \$400.000 en favor de la demandada.

### **Recurso de Apelación apoderado del demandante:**

Expone que **el a quo no tuvo en cuenta los testimonios** de los señores **Jhon Jairo Montoya y Luis Fernando Sánchez, atribuyéndoles inconsistencias en virtud del testimonio de Guillermo León Restrepo**, cuando según el Despacho, se dijo que Luis Fernando era el ayudante de Jhon Jairo; error que se dio con ocasión de un lapsus corregido por el testigo, cuando la apoderada de la demandada le preguntó al señor Luis Fernando, en el área de La Estrella y Caldas cuáles fueron los supervisores que tuvo a cargo y respondió: *tuve a cargo a Esneider Gutiérrez, Arcesio Guerra, a Jhon Jairo Montoya lo movíamos mucho para el foráneo para Medellín, a Carlos Tamayo lo tuvimos en el Oriente y parte en Medellín, los jefes de ventas se movían mucho, Iván Darío Gómez también lo tuve mucho de jefe de ventas Poblado, Copacabana, Girardota, en fin, no recuerdo muy bien pero sí; luego la apoderada le preguntó: Usted indicó que Jhon*

Jairo Montoya era jefe de ventas o fue vendedor? Es decir, ¿superior jerárquico o compañero de funciones del otro vendedor Luis Fernando Sánchez? Y contestó: *perdón si me equivoqué de apellido, es Jhon Jairo Restrepo, Jhon Jairo Montoya fue el vendedor en la compañía y Jhon Jairo Restrepo fue el jefe de ventas.* **Solicita se revise la decisión, no se dejen sin efectos los testimonios de tres personas con antigüedad de 30 años al servicio de la demandada, lo que implica restar valor a la presunción de subordinación como consecuencia de probar la prestación del servicio**, mientras que los de la demandada llevaban seis años y uno no estuvo siquiera cuando el señor Lara prestó servicios a la compañía.

Expone que partir de lo anterior, **se concluyó en forma equivocada que no había equivalencia en las funciones por el lugar de prestación del servicio**, lo que no es consideración adecuada, ya que **sí eran iguales funciones**, pero **en diferentes lugares**, pues **podían modificarse de ruta y en eso fueron muy claros los testigos, al manifestar que el demandante cumplía iguales funciones**, cargaba el vehículo, llevaba recibos y el producto no vendido.

Estima incorrecto, que los cobros administrativos que debía asumir el demandante, fuera elemento para derribar la subordinación, ya que hace parte del objeto de análisis en la demanda, esto es, si los cobros a personas no vinculadas con la compañía eran suficientes para decir que no había subordinación; lo que implica un tratamiento desigual frente a personas en iguales condiciones y que los llevó a la quiebra, si no es porque la empresa contrató a terceros para evitarla; se está hablando de un contrato de concesión mercantil, cuando el demandante no tiene

estudios para verificar las condiciones comerciales del contrato atípico celebrado con una multinacional; se pasa por alto la participación de terceros con roles que buscaban disfrazar la relación laboral.

**Se trata de relación laboral con duración superior a 30 años, exigiéndose carga probatoria imposible de cumplir** aparte de la **prueba testimonial**, debiéndose acudir a sistemas de prueba jurisprudencial respecto de los **extremos temporales** de contratación, pues mal haría un testigo en afirmar que recuerda el año, día y hora de la vinculación, lo que se entendería como un testigo amañado. Existió también un horario que daba lugar a la cancelación del contrato. Los testigos de la demandada incurrieron en contradicciones respecto a si se podía modificar el precio o la zona.

Debe tenerse en cuenta el tipo de labor desarrollada por el demandante; **los demás conductores debían estar en ruta y no había posibilidad de demostrar la situación a lo largo de toda la relación laboral, lo que exigiría acreditar cada viaje;** ellos estuvieron en reuniones con jefes donde se daban instrucciones.

### **Alegatos de conclusión:**

Los apoderados de las partes, reiteraron argumentos expuestos en el trámite de primera instancia y al sustentar el recurso de apelación.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

## **CONSIDERACIONES**

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación, de conformidad con los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, respectivamente.

### **Conflicto jurídico:**

**El asunto a dirimir radica en verificar si hay lugar a revocar la Sentencia de Primera Instancia; analizándose si la reventa de productos de Industria Nacional de Gaseosas S.A. fue realizada por el demandante de manera subordinada y en consecuencia estuvo regida por una relación laboral o si corresponde a actividades propias de un contrato de concesión suscrito entre las partes, como concluyó el *a quo*.**

**Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia, por las siguientes razones:**



Previamente debe advertirse que, en diferentes casos, donde también se solicitaba el reconocimiento de una relación laboral y la aquí demandada invocó la validez de lo pactado en el contrato de concesión para la reventa de sus productos, se profirió Sentencia donde la suscrita Magistrada Ponente y la Sala de Decisión conformada para esa época, encontraron demostrados los elementos para declarar la existencia de una relación laboral, en aplicación del principio de la realidad sobre las formas consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política; no obstante, en el asunto particular, tal como se explicará más adelante, a partir del análisis de las pruebas practicadas, se observan rasgos de autonomía en las funciones que desarrollaba el demandante, lo que indica que tales actividades estaban más alineadas con la naturaleza del contrato comercial de concesión y no uno laboral, ante la ausencia del elemento subordinación, como concluyó el Juez de Primera Instancia; anotándose que lo aquí resuelto no implica un cambio del propio precedente, sino que se adopta la decisión conforme a lo encontrado y demostrado en el caso concreto.

Para que se configure el contrato de trabajo, de conformidad con lo previsto por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990, se requiere que concurren estos tres elementos esenciales: (i) la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; (ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe

mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato y (iii) un salario como retribución del servicio.

Reunidos los tres elementos de que trata ese artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, surgiendo el derecho al pago de las prestaciones laborales, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecida en el artículo 53 de la Constitución Política, que opera en los casos en que se opta formalmente por otros contratos, cuando en realidad se presenta una relación laboral; al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia SL-1903 de 2021 Radicado 74521 indicó: *“...Debe recordarse, que esta Sala de la Corte ha resaltado en múltiples oportunidades, que el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, constituye un elemento cardinal de nuestro ordenamiento jurídico laboral, el que se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con sustento en el cual los jueces pueden dejar a un lado las formas convenidas por las partes de una relación contractual para darle prevalencia a lo que en verdad acreditan las condiciones bajo las cuales se desarrolla el negocio jurídico pactado, por lo que si de dichas circunstancias se evidencia el elemento de la subordinación característico de un contrato de trabajo, se impone derivar de ello, las consecuencias jurídicas que prevé la Ley...”*; reiterado en SL1081-2021.

A su vez, conforme al artículo 21 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo *“Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por contrato de trabajo”*, presunción que admite prueba en contrario.

**Sobre esta norma,** la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencias SL859-2021 y SL1702-2021, **precisó que conforme a la presunción consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, una vez**

**acreditada la prestación personal del servicio, se traslada la carga de la prueba al demandado;** constituyendo una excepción a la regla general contenida en el artículo 167 del Código General del Proceso y en esa medida la parte actora queda relevada de acreditar la subordinación.

Y en las **Sentencias SL3345-2021, SL1439-2021 y SL167-2020, se indicó que el elemento diferenciador del contrato de trabajo es la subordinación del trabajador** respecto del empleador, que se concreta en el sometimiento del primero a las órdenes o imposiciones del segundo; precisándose en la última de las providencias, que el contrato de prestación de servicios “...se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida con el contratante, lo que lo exime de recibir órdenes para el desarrollo de sus actividades...”.

De igual forma, la Alta Corporación ha señalado que, si bien los contratos civiles o mercantiles no son ajenos a que existan instrucciones, controles y supervisión del contratante sobre el contratista, también lo es que **“dichas acciones no pueden en modo alguno desbordar su finalidad al punto de convertir tal coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo.”** (SL3126-2021).

**En casos similares al presente promovidos en contra de INDEGA S.A., la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencias SL540 del 14 de marzo de 2023 Radicación No 94237 y más reciente, SL1842 del 1º de agosto de 2023 Radicación No 86816, explicó que, entre las principales características del contrato de concesión están:**

*“...el concesionario, compra a su nombre la mercancía para revenderla, por lo que **queda vinculado jurídicamente al comprador.** Por tanto, es evidente que la relación facilita que se alcance un «[...] **cierto poder***

**directivo y de control de recursos ajenos**, mediante el cual el fabricante llega a organizar y dirigir una red comercial, sin el menester de concertar, en la misma, parte de su capacidad de inversión» (CSJ SC, 18 abril 2018, radicado 2007-00128-01).

Otras particularidades de este tipo de contrato, implican, **(i)** que el concesionario no siempre ejerce la actividad en una zona exclusiva; **(ii)** **su lucro es la diferencia entre el precio de compra al fabricante y el de la reventa al consumidor**; **(iii)** **dispone de una organización empresarial permanente por cuenta y riesgo propio al servicio de otro comerciante**, a fin de dar salida a sus productos; **(iv)** desarrolla las actividades dentro de una rama del comercio y **(v)** **actúa con independencia, autonomía y sin subordinación jurídica de un tercero...** (Negritas fuera de texto).

**Precisó la Corte que en el contrato de concesión hay una intervención activa del empresario, al estar facultado para regular las condiciones mediante las cuales se regirá el acuerdo comercial, como las estrategias de mercadeo y publicidad que deben implementarse; siendo determinante que el concesionario cumpla con las obligaciones pactadas, para garantizar la calidad y la imagen de los productos y servicios del concedente, quien está habilitado para supervisar y vigilar el manejo** dado por el concesionario y que “...**este tipo de contratos se desarrollan bajo el amparo de la confianza y son intuito personae...**”.

**El Juez de Primera Instancia explicó en términos generales, que si bien algunos aspectos dieron cuenta que el señor Jorge Gregorio se presentaba a las instalaciones de INDEGA S.A. con el fin de desarrollar la labor, también lo es que se trata de características comunes a los contratos para reventa, en el que nada impide al concesionario ejecutar las funciones en forma directa, dirigirse a los patios o bodegas de INDEGA S.A. y que ésta efectuara ciertos controles o supervisión, sin que por ello se activara la presunción en favor del actor para tenerla como un servicio personal de carácter laboral; el**

hecho de recibir dineros como contraprestación también es común al contrato de concesión. Refirió a que **la prueba testimonial ofreció versiones encontradas, ya que cada grupo presentó una realidad distinta;** que en **interrogatorio el demandante manifestó haber estado enfermo durante una semana, dejando a cargo a unos muchachos incluido un hijo suyo, periodo en el que no prestó el servicio;** el testigo Luis Fernando Sánchez ejercía la actividad como foráneo, cuestionó cómo hacía para estar con el demandante si éste afirma que asistía siempre a la sede de la empresa, quedando un vacío sobre la prueba de los hechos ante la falta de presencialidad; **llamó la atención respecto a que el señor Oscar manifestó que no se requería la presencia del demandante, sino que lo importante era el cumplimiento del contrato de concesión,** pues **el actor no siempre asistía y contaba con un familiar que administraba;** el testigo Luis Fernando dijo que en sus rutas podía ausentarse dos o tres días, concluyendo que los testigos aunque manifestaron ejercer la misma función como conductores, lo cierto es que estaban en situación distinta al demandante, ya que **desarrollaban la labor en otros sitios o por fuera de la ciudad,** tampoco recibían dineros como el demandante sino consignaciones y por tanto, **no había lugar a equiparar los cargos y funciones.**

**El a quo encontró probados elementos propios del contrato de concesión,** en la forma pactada por las partes, que no lo hacen ilegal ni generan que mute a otra modalidad, como el registro ante las autoridades competentes en calidad de comerciante, definición de rutas para distribución, el arrendamiento limitado del vehículo para una labor específica, valorándolo como un negocio jurídico que goza de pleno valor, sin

que sus efectos fueran desvirtuados; concluyó que **no estaba acreditado el elemento de subordinación**, lo que básicamente se mencionó fue un horario y asistencia a reuniones, pero quienes afirmaron esto no tenían contacto o encuentro permanente con el señor Jorge Gregorio, los testigos no mencionan haber presenciado la forma en que se dieron tales encuentros, si había sanciones por no acudir; reuniones que también son características del contrato de concesión, así como poner a disposición elementos de conocimiento para distribución de los bienes y proyectar la marca en beneficio de ambos contratantes.

**El apoderado del demandante solicita se revise la decisión absolutoria, tendiente a que no se dejen sin efectos los testimonios de tres personas con antigüedad de 30 años al servicio de la demandada, lo que implica restar valor a la presunción de subordinación como consecuencia de probar la prestación del servicio.**

Al respecto, **encuentra esta Sala de Decisión Laboral** que está por fuera de discusión, el hecho referente a que el señor Jorge Gregorio ejecutó actividades relacionadas con la distribución y venta de productos de INDEGA S.A., lo cual fue aceptado por la accionada al dar respuesta a la demanda; tal situación fue confirmada por los diferentes testigos, sin que exista alguna duda frente a ese tema.

El asunto a dilucidar es si el cumplimiento de esas actividades, fueron desarrolladas por el demandante en forma subordinada para INDEGA S.A. o si correspondieron a la ejecución de lo pactado en un contrato de concesión, para lo cual

habrá de acudirse no solo a lo manifestado por los testigos, sino también a lo que revela la prueba practicada en su conjunto.

Es así como, según la **prueba documental** obrante en el expediente, encontramos que las partes suscribieron los siguientes contratos:

- El día **25 de octubre de 2002** fue celebrado un **“Contrato de concesión para la reventa”**, según se extrae del considerando primero del documento denominado **Acuerdo de terminación anticipada del contrato de concesión para la reventa de producto**, firmado el día **4 de marzo del año 2003** (folios 46 y 47 archivo 01), donde el señor Lara Quintero declaró expresamente que el contrato que los unió fue de concesión y que otorgaba el paz y salvo a la compañía frente a cualquier eventual litigio que pudiera darse, aspectos que son indicativos de una naturaleza comercial.

- El día **11 de agosto de 2008** celebraron **“Contrato de concesión para la reventa”**, incluyendo las siguientes cláusulas:

**“...PRIMERA – OBJETO: LA COMPAÑÍA se compromete a otorgar al CONCESIONARIO una concesión para que éste adquiera de aquella y revenda, en forma no exclusiva, ciertas cantidades acordadas de LOS PRODUCTOS y EL CONCESIONARIO se compromete a adquirir y pagar a LA COMPAÑÍA tales cantidades de PRODUCTOS para venderlos, en forma exclusiva, y a velar por la competitividad de LOS PRODUCTOS y la buena imagen de LAS MARCAS.**

**LA COMPAÑÍA se obliga a transferir al CONCESIONARIO conocimientos, experiencia y técnicas comerciales y EL CONCESIONARIO se obliga a cumplir con las políticas de LA COMPAÑÍA en relación con la distribución, imagen de LOS PRODUCTOS y de LAS MARCAS, competitividad de los mismos, servicio a los clientes y condiciones de comercialización.**

*LA COMPAÑÍA se reserva el derecho de vender o distribuir LOS PRODUCTOS directa o indirectamente y EL CONCESIONARIO no tendrá derecho a reclamar compensación o indemnización alguna por dicha causa.*

**SEGUNDA – PRECIO Y FORMA DE PAGO: LA COMPAÑÍA venderá al CONCESIONARIO LOS PRODUCTOS a los precios y condiciones que establezca LA COMPAÑÍA al momento de la entrega y esta pagará el precio de LOS**

**PRODUCTOS de contado, en la fecha de emisión de la factura de compraventa expedida por LA COMPAÑÍA.**

(...)

TERCERA – DESPACHO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS: el despacho y la entrega de LOS PRODUCTOS se sujetará a las siguientes reglas:

**3.1. La entrega de LOS PRODUCTOS se realizará en las instalaciones de LA COMPAÑÍA o en el lugar que acuerden las partes;**

(...)

CUARTA – MARCAS: LA COMPAÑÍA otorga al CONCESIONARIO una autorización gratuita para el uso de LAS MARCAS de LOS PRODUCTOS, limitada al/los vehículo (s), predio (s) y/u otros activos que EL CONCESIONARIO utilice para la reventa de LOS PRODUCTOS, en los términos y condiciones que determine LA COMPAÑÍA en su calidad de titular o licenciataria de LAS MARCAS.

(...)

OCTAVA – MERCADEO, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD:

**8.1. Con el objeto de maximizar las ventas en beneficio mutuo de las partes y con fundamento en la información periódica que le suministrará EL CONCESIONARIO, LA COMPAÑÍA elaborará estudios de mercado sobre el comportamiento de los compradores de LOS PRODUCTOS. Con fundamento en dichos estudios, LA COMPAÑÍA podrá organizar talleres, seminarios y reuniones sobre mercadeo y estrategias o técnicas de venta, a los que invitará al CONCESIONARIO.**

**8.2. Para beneficio mutuo de las partes y con el fin de incentivar la reventa de LOS PRODUCTOS, los gastos de publicidad, promoción y exhibición de LAS MARCAS y de LOS PRODUCTOS serán sufragados por LA COMPAÑÍA...”** (folios 162 a 173).

**Los testigos Guillermo León Restrepo Arboleda** (quien se desempeñó en la demandada como Analista, Supervisor y Gerente de Ventas), **John Jairo Montoya** y **Luis Fernando Sánchez Restrepo** (conductores), manifestaron que el demandante prestaba sus servicios para INDEGA S.A., debiendo asistir a reuniones a las 6:00 a.m. en los patios de la sede de la demandada, dirigidas por supervisores, donde se trataban diversos temas y se daban instrucciones sobre la ruta, promociones y demás; que el demandante recibía órdenes de los Jefes de Reparto y Supervisores de Ruta; la demandada vendía a través de una *preventa*, al día siguiente el demandante entregaba el producto y cobraba lo correspondiente, en las rutas y zonas previamente asignadas, sin facultad para vender el producto a otros clientes; el producido de la venta debía entregarlo a la empresa al finalizar el día efectuando la correspondiente



liquidación; no podía fijar precios distintos a los establecidos por la demandada, en los casos en que el cliente no se encontrara debía devolver el producto a la empresa; se les exigía a los concesionarios buena presentación personal, con uniforme; era la demandada quien asignaba los ayudantes a quienes debía cancelar el salario y había una hora fija de entrada y en la cual deben estar los camiones en las instalaciones de la empresa.

Aspectos que conllevan a confirmar que la actividad del señor Jorge Gregorio, estaba directamente relacionada con la venta y distribución de productos de INDEGA S.A.; no obstante, con lo analizado hasta este punto, no se activa la presunción de una relación laboral, puesto que se corrobora es la ejecución de lo pactado en el contrato de concesión; **sobre la presunción en un caso similar**, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia **SL1842-2023** señaló “...*Dadas las especiales características del contrato de concesión, el argumento central del recurrente sobre la existencia de un servicio personal a efectos de aplicar la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, carece de validez, ya que la relación comercial supuso que comprara mercancía a un precio determinado y la revendiera, lo que en modo alguno es un servicio personal en los términos del artículo 23 del compilado laboral...*” (Negritas fuera de texto).

Respecto al elemento **remuneración**, lo que **se pactó fue una utilidad derivada de la actividad de reventa**, a manera de comisiones; en ese sentido, el demandante en **interrogatorio de parte** respondió que los **gastos administrativos** como tanquear el carro, comprar los uniformes, pagar el seguro y la renta del carro, se cubrían con las comisiones sobre las ventas.

Se evidencia también que **el demandante contaba con una cierta organización administrativa, conformada por un grupo de personas, incluyendo familiares, con quienes ejecutaba las actividades de la concesión e incluso, tenía la potestad de no asistir en determinado periodo de tiempo**, sin que mencionara llamados de atención, estar sometido a reglamento o ser objeto de sanción disciplinaria por ese hecho; **en su ausencia, podía dejar él mismo a cargo a otros de sus colaboradores para cumplir con las tareas de conducción del vehículo y de la distribución del producto.**

Al respecto, en **interrogatorio** se le indagó si tenía **personas a cargo** para ejecutar el contrato de concesión, explicando que la empresa “...*le pide a cada quien las hojas de vida de quien vaya a entrar...*”, le hacen una visita domiciliaria y le ponen las personas que necesite; reconoció que **el señor Jorge Luis Lara Núñez estaba dentro del personal a su cargo**, quien **era hijo suyo**; se le indagó si “...*¿en algunas ocasiones no asistía y mandaba a su hijo o a otro de sus trabajadores para ejecutar el contrato?...*” Y respondió “...*la única fecha que yo estuve ausente fue una semana, me iba a hacer una operación de ojo derecho ... yo saqué esa semana y dejé a cargo a los muchachos, ... cuando volví a trabajar ... me armaron un poco de cosas ... al verse uno con las manos caídas dije pues si no hay más trabajo ni nada yo me voy ... no les firmé nada y me retiré de la empresa ... no les demandé porque pensé que me darían otra oportunidad a mí o a un hijo ...*”; **¿a cuáles muchachos dejó a cargo?** R/ “...*los compañeros que estaban ahí, había otro que manejaba también, había dos conductores ... Javier Lara que también era hijo mío y otro muchacho de nombre Hugo, ellos tres...*”; sobre pérdidas o robo del producto, informó que si una botella se rompía o una caja se perdía le correspondía responder por ese costo.

**También rindieron declaración los señores Cristian Leonardo Pérez Zapata y Oscar Pajón Lizcano,** empleados de la demandada, quienes expusieron que la relación entre INDEGA S.A. y el demandante fue comercial o mercantil, en ejecución del contrato de concesión, en virtud del cual se había pactado el impulso de la marca, compraba el producto a un precio para vender en la zona y la diferencia era su ganancia; el concesionario contaba con libertad de vender el producto en otras zonas pero en caso de trasladarse a otro barrio, seguro encontraría ya otro vendedor asignado a esa área; **el demandante asumía los costos de la operación.**

Es de anotarse que, **en otros procesos donde se pretendía también declaración de relación laboral, se demostró que el vehículo utilizado para la distribución del producto era arrendado por INDEGA S.A., pactándose el pago de una suma variable diaria** a cargo del demandante; **distinto al presente caso,** donde no hay prueba de que el carro distribuidor fuera alquilado por la demandada, sino que obra **certificación expedida por la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín** de fecha 15 de julio de 2014, que contiene el **histórico de propietarios del vehículo** de placas LEG-464, utilizado por el actor para el transporte de los productos, registrado como *camión de estacas*, afiliado a **Transportes Mocari Ltda.** y desde el año 1983 hasta 2010 sus propietarios fueron: Distribuidora Cada S.A., Inversiones Medellín S.A., Humberto Madrid Arango, Alicia Mesa Velásquez, Jaime Enrique Zapata Monsalve, Sandra Isabel Zapata Ceballos, Aura María Henao Aguirre, Ferney Giraldo Marín, siendo el último dueño José Roberto Correa Ángel (folios 75 y 76 archivo 01); es decir que el automotor no aparece titulado a nombre de INDEGA S.A. ni del demandante, lo que da sentido a

lo manifestado en interrogatorio, respecto a que de la utilidad de la venta asumía *la renta del carro*.

**Sin que se cuente con prueba que demuestre la subordinación** del demandante en la ejecución de las actividades de venta y distribución contratadas con INDEGA S.A., esto es, que las instrucciones, orientaciones, supervisión y/o control efectuada por parte de Indega S.A., escaparan a la naturaleza propia del contrato de concesión y trascendieran al ámbito laboral. Con relación a este aspecto, el Órgano de Cierre en SL1842-2023 indicó que el concedente está facultado para desplegar directrices sobre el concesionario, tendientes al cuidado de la marca y las características del producto, sin que ello por sí mismo implique una subordinación; tal como explicó el Juez de Primera Instancia, veamos:

*“...Ahora bien, es reiterativo el recurrente al afirmar que recibió órdenes u orientaciones de parte de Indega S.A. para el desarrollo de sus labores, pero nada de eso se prueba ni acredita con las pruebas denunciadas.*

*En particular, los documentos referidos a entrega de inventarios, P&G y seguimiento de plan de trabajo son consecuentes con la naturaleza del vínculo que unió a las partes, que **tiene despliegue de directrices de parte del contratante hacia el contratista para el cuidado de la marca y de las características del producto concesionado.***

*Y ello es así, ya que **el contrato de concesión no supone la prestación de un servicio personal por el contratista, sino la reventa de una mercancía que lleva inmersa logos, marcas y características de producto que deben ser respetadas y vigiladas con el ánimo de evitar su destrucción o distorsión por el uso indebido que pueda dársele, sin que esto implique por sí mismo la aparición de una subordinación como la alegada...*** (Negritas fuera de texto).

Otro aspecto a tener en cuenta, es que en interrogatorio el demandante manifestó “...yo pagaba el seguro...” y **obran en el**

**expediente reportes de cotización al Sistema de Pensiones como dependiente con múltiples personas jurídicas distintas a INDEGA S.A., en diversos periodos que se contraponen a las fechas en que afirma estuvo subordinado a la demandada,** tales como: John Jaramillo Martínez (1992-1994), Luz Estella Lara (1995), Gustavo Díaz B (1996, 1998 y 1999), Luis Gustavo Valencia Toro (1996), Contratar Ltda. (1997, 1998, 2000), Proservis Generales S.A. (1999), Nasa y/o Carlos Eduardo Duque (2000, 2001), Gildardo Echeverri, Wimar CTA (2001 - 2004), Eficacia S.A. (2002), Cooperativa de Trabajo Asociado Prointere (2004, 2005, 2006, 2008 - 2010), Antioqueña de Bebidas Ltda. (2005), como independiente en abril y octubre de 2010 (fl 49 archivo 01).

Así las cosas, de acuerdo a lo explicado en precedencia, no está demostrado el elemento de la subordinación y tampoco las condiciones para establecerla por presunción, al existir en el plenario prueba en contrario, tal como explicó el *a quo* y en consecuencia, hay lugar a **confirmar** la Sentencia absolutoria que por vía de apelación se revisa.

### **COSTAS:**

**Se condenará en costas en esta Segunda Instancia** a cargo del demandante, al no haber prosperado el recurso de apelación formulado; fijándose las agencias en derecho en cuantía equivalente a **medio salario mínimo legal mensual vigente (\$580.000)** en favor de la demandada; de conformidad con lo

establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso y el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

### **DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO:** Se **CONFIRMA** la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de **Apelación** se revisa; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

**SEGUNDO:** Se **CONDENA en Costas** en esta Segunda Instancia a cargo del demandante **Jorge Gregorio Lara Quintero**, fijándose las agencias en derecho en cuantía equivalente a **medio salario mínimo legal mensual vigente (\$580.000)** en favor de la demandada **Indega S.A.**; según lo indicado en la parte motiva.

**TERCERO:** Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, en el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

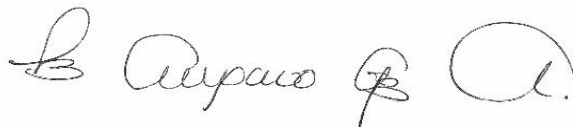
**Las Magistradas,**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**  
**Magistrada Ponente**



**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL**



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SECRETARIA SALA LABORAL  
EDICTO VIRTUAL**

**HACE SABER:**

**Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación  
se relaciona:**

**Proceso** : Ordinario de Segunda Instancia  
**Demandante** : **JORGE GREGORIO LARA QUINTERO**  
**Demandados** : **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. -INDEGA S.A.-**  
**Radicado** : **050013105 019 2014 01009 02**  
**Providencia** : Sentencia  
**Temas y Subtemas** : Laboral individual – contrato de concesión, contrato realidad, Subordinación -  
**Decisión** : Confirma Sentencia absolutoria  
**Sentencia N°** : 245

**FECHA SENTENCIA:** 4 de diciembre de 2023

Fijado martes 5 de diciembre de 2023 a las 8:00 a.m.

Desfijado martes 5 de diciembre de 2023 a las 5:00 p.m.

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

**RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS**  
**Secretario**